

Construcción de realidades mediáticas en las crisis del proceso de desmovilización paramilitar



**Dos miradas,
un silencio**

Juliana Castellanos Díaz

30 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

En alianza con



WHITNEY
INTERNATIONAL UNIVERSITY SYSTEM
Colombia



AMERICAN
UNIVERSITY
SYSTEM

Construcción de realidades mediáticas en las crisis del proceso de desmovilización paramilitar



Dos miradas, un silencio

Juliana Castellanos Díaz

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

En alianza con
 WHITNEY
INTERNATIONAL UNIVERSITY SYSTEM
Colombia

 AMERICAN
UNIVERSITY
SYSTEM



Dos miradas, un silencio

**Construcción de realidades
mediáticas en las crisis del proceso
de desmovilización paramilitar**

Castellanos Díaz, Juliana

Dos miradas, un silencio: construcción de realidades mediáticas en las crisis del proceso de desmovilización paramilitar / Juliana Castellanos Díaz; editor Eduardo Norman Acevedo. – Bogotá: Editorial Politécnico Grancolombiano, 2011.

162 p.; 24 cm.

Incluye bibliografía e índice.

ISBN 978-958-8721-01-9

ISBN Libro digital 978-958-8721-02-6

1. CONFLICTO ARMADO-COLOMBIA. 2. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS-COLOMBIA.
3. PARAMILITARISMO-GRUPOS ARMADOS-COLOMBIA. 4. ACUERDOS (PROCESOS) DE PAZ-COLOMBIA. 5. BIBLIOTECA MARÍA CRISTINA NIÑO DE MICHELSEN POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA. I.Tít. II. Castellanos Díaz, Juliana. III. Norman Acevedo, Eduardo, ed.

322.42 cd. 21 ed.

© **Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano**
Miembro de American University System

ISBN 978-958-8721-01-9

ISBN DIGITAL: 978-958-8721-02-6

Editorial Politécnico Grancolombiano
Calle 57 No. 3 – 00 Este Bloque A Primer piso
PBX: 3 46 88 00 ext. 808
www.poligran.edu.co/editorial

Noviembre de 2011
Bogotá, Colombia

Fundación Politécnico Grancolombiano Institución Universitaria
Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes

Pablo Michelsen Niño
Rector

Sergio Hernández Muñoz
Decano Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes

Eduardo Norman Acevedo
Director editorial

David Ricciulli
Coordinador editorial

Hernán Darío Cadena
Corrección de estilo

Taller de Edición · Rocca® S. A.
Ana María Salcedo Aguilar
Diseño y armada electrónica

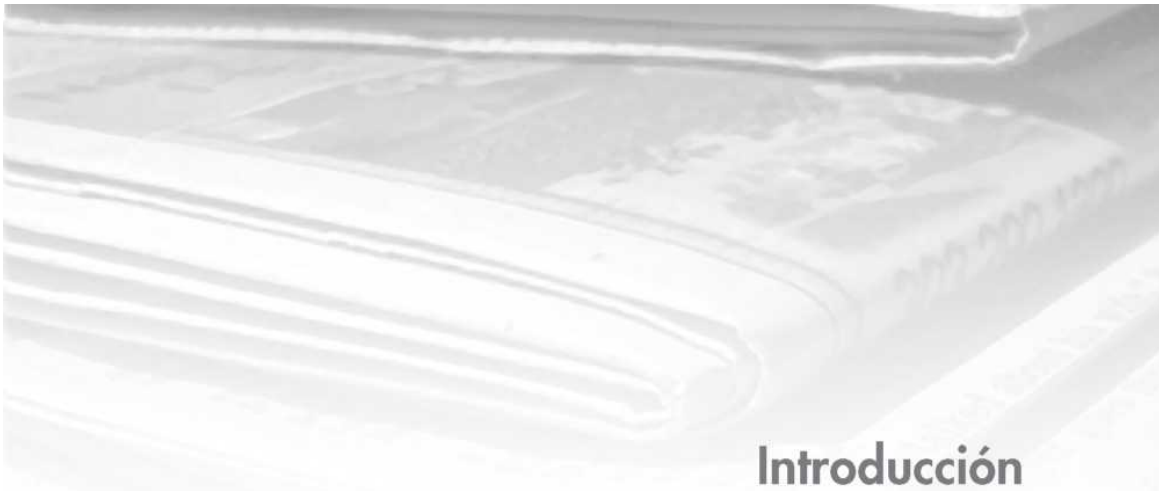
Javergraf
Impresión y encuadernación



EPUB X Publidsa

La Editorial del Politécnico Grancolombiano pertenece a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ASEUC.

El contenido de esta publicación se puede citar o reproducir con propósitos académicos siempre y cuando se dé cuenta de la fuente o procedencia. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor.



Cada uno de los hechos que se desarrolla en Colombia por cuenta del conflicto armado y de los intentos por solucionarlo es objeto de múltiples estudios desde distintos campos disciplinarios. Las esferas mediáticas no escapan a esas miradas en tanto son espacios a los que la sociedad acude para descubrirse, dimensionarse, conocer y comprender lo que acontece en su contexto, y desde allí situarse simbólicamente en relación con el universo circundante. Tales espacios de comunicación masiva son escenario para los gobernantes que buscan adeptos y aplausos, para los actores del conflicto que quieren visibilizarse, para las víctimas de ambas partes que intentan denuncias sociales y solidaridades colectivas. Todos buscan aparecer en esos espejos fragmentados tras los que cada quien descubre cómo moverse para que se proyecte la figura deseada, como un juego de sombras chinas en el que las manos interpuestas construyen figuras ficticias.

Atendiendo lo anterior, este libro se concentra en las esferas mediáticas, al dar la vuelta atrás y colocar la mirada sobre uno de los proyectos más importantes y controvertidos del mandato del saliente presidente de Colombia, Álvaro Uribe

Vélez: el proceso de desmovilización paramilitar. Un proceso que se tornó extraño y carente de información clara; sobre todo en los momentos coyunturales en los que estuvo a punto de derrumbarse. En este contexto surge un interrogante a partir del cual se instaura esta obra: cuál es la realidad que sobre las crisis del citado proceso constituye el entramado discursivo del periódico El Tiempo, el más importante diario de circulación nacional; y el periódico El Meridiano de Córdoba, principal diario de la región en la que se instauró la zona de distensión paramilitar para los diálogos y las desmovilizaciones.

Los momentos coyunturales tienen la virtud de permitir la fuga de información que se quería secreta, revelar discursos ocultos, desnudar los intereses de las partes involucradas; pero también posibilitan corroborar la teoría de que los medios construyen realidades que el sujeto receptor convierte en modelos o imágenes mentales sobre un determinado hecho. De tal modo, las siguientes páginas van en la búsqueda de los modelos mediáticos de realidad hilvanados por los periódicos mencionados, a partir de uno de los capítulos más importantes de la historia reciente del país.

La ruta escogida para lograr tal propósito inicia desde el reconocimiento del proceso de desmovilización paramilitar como un acontecer nacional que permitió a los colombianos vivir lentamente una etapa de desenmascaramiento de este grupo ilegal. Por consiguiente, el objetivo del primer capítulo es contextualizar el surgimiento, desarrollo y método de expansión de los paramilitares en el país.

El segundo capítulo tiene por fin analizar las estrategias de comunicación pensadas y ejecutadas por los paramilitares en aras de consolidar una buena imagen frente a la opinión pública, antes y durante el proceso de desmovilización. En este escenario se concibe y argumenta la idea de que los medios de masas construyen la realidad a partir de lo que en este libro se denomina *lo informable* y *lo no informable*. Los datos que el sujeto emisor entrega, tanto como los que desconoce o decide obviar son parte constitutiva de los denominados modelos

mediáticos de realidad. Para descifrarlos –desde la línea de Teun Van Dijk– el capítulo presenta una propuesta metodológica a la luz del análisis del discurso de seis crisis que enfrentaron Gobierno y paramilitares entre noviembre de 2003, fecha en la que inician las desmovilizaciones, y marzo de 2006, tiempo en el que se vincula a la vida civil el último comandante que hace parte del acuerdo de Ralito. El corpus de la investigación corresponde al artículo que anuncia la crisis y al artículo que divulga la solución de ella en cada uno de los periódicos seleccionados.

La aplicación de la metodología da lugar al tercer capítulo, en el que se hace un exhaustivo estudio a cada una de las crisis desde los artículos que las relatan, lo que permite detectar los modelos de realidad que configuran de manera exclusiva. En este escenario cada coyuntura es tratada como una historia particular que contiene *apertura, conflicto y resolución*. La observación de los relatos periodísticos del proyecto de desmovilización evidenció que el artículo que anuncia la crisis constituye la apertura, es decir, la contextualización; y también contiene el conflicto, en el que se explica cómo se desarrollan los problemas entre las partes (gobierno– paramilitares). La resolución de la historia obedece al último artículo que se publica sobre el tema durante el proceso, lo que no significa que evidencie necesariamente la información sobre el desenlace de la crisis.

El cuarto capítulo lleva a una reflexión global de los modelos de realidad estructurados por los periódicos El Tiempo y El Meridiano de Córdoba a lo largo del proceso. No se trata de un estudio especializado en cada crisis, sino de un análisis en conjunto en el que se determina la realidad que construyó el medio para sus receptores.

Cala D'Or Mallorca 2010



El denominado *proceso de desmovilización paramilitar*, que desde noviembre de 2002 y hasta marzo de 2006 desarrolló el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, despertó en la comunidad nacional e internacional un profundo deseo por descubrir quiénes se escondían tras la máscara del paramilitarismo colombiano. Porque hablar de los *paramilitares* es común en esta nación, pero su connotación es muy compleja, especialmente si se considera que finalizado el proceso, y extraditados algunos de sus máximos líderes, todavía se desconocen elementos claves de su organización. Sin embargo, no puede olvidarse que desde años atrás muchos vienen siguiendo la pista a estos grupos que sorprenden por los fuertes nexos que tienen con el narcotráfico y con reconocidos políticos, por los amplios territorios en los que ejercen un completo dominio, por su infiltración en las instituciones estatales y por la cantidad de víctimas que han cobrado dentro del conflicto armado colombiano.

Narcotráfico, fuente de vida

“Desde 1989 cuando se filtró a la prensa el primer análisis de conjunto por parte de una agencia gubernamental colombiana, en ese caso el DAS, acerca del paramilitarismo como fenómeno en expansión, el nexo con el narcotráfico era tan obvio que para efectos de las conclusiones se lo dejaba sobreentendido” (Cubides 2005, p. 205). Lo obvio está escrito en la historia del paramilitarismo, que podría situarse desde Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, quien, a principios de la década de los ochenta con un poder dado por el narcotráfico, empezó a hacer presencia en el Magdalena Medio, territorio, entonces, de esmeralderos. Con ellos, inicialmente, creó una alianza que posteriormente se rompió y lo llevó a convertirse en jefe de los grupos paramilitares que por aquel tiempo reinaban en Puerto Boyacá, Yacopí, y Puerto Salgar. Su estrategia era unirse, a través del patrocinio económico, a grupos que estaban en contra de la guerrilla. Con tal dominio, Rodríguez Gacha se convirtió en la puerta de entrada para el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, al Magdalena Medio.

“Paralelamente a este proceso se produjo el desdoblamiento del frente 4 de las FARC y la presencia del frente 11 en la zona, lo que llevó a las mafias esmeralderas a realizar alianzas y a enfrentar a la organización insurgente que comenzaba a disputarle poder en esta región, de gran importancia estratégica por la cantidad de tierras de propiedad de esmeralderos y narcotraficantes.” (Garzón, 2005, p.54). En ese contexto, algunos de los propietarios, en acuerdo con políticos locales, hicieron uso del modelo paramilitar implementado por el Mexicano.

Otro de los hechos relevantes de aquella época es la creación en 1981 del grupo Muerte A Secuestradores, MAS. Su constitución se generó luego de que

el grupo guerrillero M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de varios integrantes del Cartel de Medellín. Tras el hecho, hombres de la mafia aportaron dinero para crear un escuadrón de 2.230 integrantes, el cual tenía por función ejecutar a cualquier persona comprometida en algún secuestro (CINEP 2005, p. 59).

Un estudio del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, muestra que el 20 de febrero de 1983 el Procurador General de la época hizo público su informe sobre el MAS con los nombres de 163 personas vinculadas, entre las cuales figuraban 59 miembros activos de la Fuerza Pública. En consecuencia, el estudio concluyó que “El Gobierno se abstuvo de llamar a calificar servicios a los acusados. El Congreso de la República haría lo mismo al aprobar los ascensos y honores a un gran número de ellos. Una lectura retrospectiva de esa lista muestra que el Estado a través de todos sus poderes, le confió a esos integrantes del MAS, en lo sucesivo, altas responsabilidades en el manejo del orden público” (2005, p.70). Con este antecedente, el grupo MAS operó en muchas regiones de Colombia bajo el seudónimo de *autodefensas*, aprobadas por el Estado y patrocinadas por narcotraficantes.

En un artículo publicado por El Tiempo el 26 de septiembre de 2004, William Ramírez Tobón, ex director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, aseguró que el apoyo que las autodefensas recibían en algunas regiones, por el establecimiento de un orden, era absolutamente pasivo en términos económicos. Por tanto, el narcotráfico con todas las figuras que le conciernen como la siembra, procesamiento, protección de narcorrutas, protección de narcopistas, entre otras, es, más que la fuente de financiación, la fuente de vida de los actuales grupos paramilitares. Si se sigue mirando la historia desde el Mexicano, esto se ratifica.

Entre 1986 y 1987, este personaje extendió sus comandos al Putumayo en un punto cercano a la cabecera municipal de Puerto Asís, con un grupo localmente reconocido como Los Masetos, derivación de la sigla MAS. Las tareas del grupo eran de orden paramilitar: “protección de laboratorios, enfrentamiento con la guerrilla, asesinato sistemático de líderes de la Unión Popular y líderes populares, campañas de limpieza social y, en su última etapa, extorsión de ciudadanos con algún poder económico” (Garzón, 2005, p. 58). El fracaso del Cartel de Medellín, tras la persecución y asesinato del Mexicano en 1994, y de su máximo líder, Pablo Escobar, en 1995, no representó la caída del paramilitarismo, como se hubiera esperado. Por el contrario, la muerte de estas dos figuras generó una reorganización de los grupos paramilitares. Una de esas reorganizaciones fue la que se produjo en las comunas nororientales de Medellín a cargo de Diego Fernando Murillo —alias Don Berna— que gestó su proyecto con el apoyo de bandas de jóvenes que operaban en la región al servicio del Cartel de Medellín, como la Terraza y la Cañada.

Otro de los cambios importantes que se generó fue la creación en 1996 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), idea de los hermanos Castaño. Ellos gozaban de gran poder porque, tras la muerte de Escobar, con quien habían trabajado, extendieron sus dominios hacia Córdoba, Antioquia, Sucre, Urabá y el Magdalena Medio. Dos años más tarde, grupos del Magdalena Medio se separaron de las AUC y formaron el Bloque Central Bolívar (BCB), comandado por Ernesto Báez, Julián Bolívar y Javier Montañéz.

Con las nuevas cabezas de la organización, el narcotráfico siguió siendo fuente de financiación, pero también se constituyó en causa de múltiples choques entre los líderes, conflictos que se acrecentaron meses antes de que se anunciara públicamente el inicio del proceso de desmovilización. En septiembre de 2002, por ejemplo, se presentaron “acusaciones del

desaparecido Bloque Metro a Carlos Castaño por vínculos con el narcotráfico; y de Castaño a Ernesto Báez y Javier Montañéz del BCB, por lo mismo” (Cubides, 2005, p.212), y también se conocieron acusaciones de Doble Cero a Castaño por permitir el ingreso de narcotraficantes a las AUC. Este tire y afloje hizo que Castaño renunciara a la dirección de las AUC el 12 de julio de 2002, bajo el argumento de estar en desacuerdo, entre otras cosas, con que la organización estuviera involucrada con el tráfico de drogas.

Durante el proceso de desmovilización, y en todos los procesos judiciales posteriores a él, el tema del narcotráfico se convirtió en una piedra en el zapato tanto para el Gobierno como para los paramilitares. En primera instancia, la división que generó en estos grupos ilegales la posición de Castaño en contra del vínculo autodefensas-narcotráfico, obligó al Gobierno a instalar varias mesas de diálogo por petición del BCB y de las Autodefensas de los Llanos orientales, quienes se negaron a compartir la mesa con las AUC. En segunda instancia, varios de los comandantes paramilitares hacían parte de las listas de las personas pedidas en extradición por Estados Unidos, entre los cuales figuraban Salvatore Mancuso, Jorge 40 y el mismo Carlos Castaño (fallecido). En tercera instancia, porque en pleno desarrollo del proceso se produjeron constantes denuncias de la sociedad civil contra varios de estos grupos, por continuar desarrollando actividades ligadas al narcotráfico.

Terror, método de extensión territorial

Es importante observar el maridaje que se da entre el narcotráfico y la toma violenta por parte de los grupos paramilitares a regiones extensas y estratégicas. Alfredo Rangel explica perfectamente la diferencia que existe entre la guerrilla y los paramilitares en cuanto a la lucha por tierras y

poblaciones: “Para la guerrilla el control territorial es funcional y coadyuva a su proyecto de expansión político-militar, mientras que la propiedad de la tierra es un tema de su plataforma política que debe ser resuelto por medio de una reforma agraria. Para los paramilitares el control de territorios va muy ligado a su voracidad para hacerse lo más pronto posible a la propiedad de la tierra (...) es una vía de acumulación y blanqueo de capitales particulares adquiridos por medios ilícitos y violentos” (2005, p.14).

El uso del terror fue el método paramilitar para adueñarse de las tierras que deseaban y/o necesitaban. Caso puntual las masacres^[1], cometidas en aras de apropiarse de zonas aptas para el cultivo de plantas ilícitas, o zonas que por su localización eran claves para las narcorrutas.

En Colombia las masacres realizadas por los paramilitares aparecen en 1981, cuando Fidel Castaño y Carlos Castaño fueron alistados como “guías” del Batallón Bomboná del Ejército Nacional, que comenzó a entrenar las primeras autodefensas civiles. Tras el adiestramiento, “Fidel se convirtió en el líder más temible de esos escuadrones de la muerte. Masacres perpetradas en Córdoba y Urabá, como la de La Mejor Esquina (el 26 de marzo de 1988), en la cual él participó personalmente, sembraron el terror” (CINEFJ 2005, p. 143).

Las políticas del Ejército en cuanto a la implementación del paramilitarismo en Colombia se dieron a comienzos de los años 60, “a raíz de la visita practicada a Colombia por la misión Yarbourough del Ejército estadounidense (febrero/62) y de las directrices secretas que dejó consignadas dicha misión, el Estado colombiano adoptó una estrategia contrainsurgente paramilitar, ya desde antes que surgieran las guerrillas de este ciclo (1964-1965)” (CINEFJ 2005, p.17).

Otro suceso que en la década de los noventa aceleró el ritmo de crecimiento de los grupos paramilitares fue la creación, en 1994, de las Cooperativas de Vigilancia Rural, conocidas como las Convivir. Se trataba de servicios de vigilancia y seguridad privada impartida por las poblaciones rurales, para lo cual podían hacer uso de armas de defensa personal. Fueron implementadas por el gobierno de Ernesto Samper bajo el decreto 356. De esta manera se legitimó el paramilitarismo, aunque el gobierno de entonces insiste en la brecha que existe entre las Convivir y los paramilitares.

En el corto plazo, las Convivir fueron vistas en el país con terror por el número de masacres, asesinatos, y torturas que se perpetraron bajo su nombre. “Las Convivir se fueron creando de manera masiva, sin una clara orientación nacional, ni la existencia de una capacidad institucional para ejercer una supervisión efectiva en las zonas de conflicto donde sus acciones se entremezclaban con las de otros actores armados; no solo no sirvieron para disminuir el paramilitarismo sino que muchas veces lo ayudaron a fomentar” (Peña, citado en Garzón, 2005 p. 66). Distintas investigaciones han demostrado que las zonas donde tuvieron más acogida las Convivir fue en aquellas donde el paramilitarismo cobró fuerza, como es el caso de Córdoba y Antioquia.

La guerra a la que la sociedad civil se vio sometida por los grupos paramilitares los llevó a escoger entre dos alternativas que agudizaron el conflicto colombiano. La primera, desplazarse de su tierra y, la segunda, quedarse en ella sirviendo al grupo ilegal. De esta forma, los paramilitares pasaron de ser los *señores de la guerra*^{2}, a ser los señores del orden y la justicia, y los señores de la economía en los territorios de los que se apoderaban.